



📌 El fin de semana, policías y militares desalojaron a indígenas en el ejido de San Sebastián

Amagan en Chiapas con detener a quienes apoyen a integrantes de *la otra campaña*

HERMANN BELLINGHAUSEN

Enviado

Periódico La Jornada
Martes 12 de abril de 2011, p. 16

San Cristóbal de las Casas, Chis. 11 de abril. Los grupos oficialistas del ejido San Sebastián Bachajón (municipio de Chilón) han amenazado, según versiones de ejidatarios de *la otra campaña*, con “agarrar” a los defensores de derechos humanos y a las personas que acudan de manera solidaria. Si bien los abogados de los cinco indígenas presos no han dejado de realizar su trabajo, es un hecho que lo hacen bajo riesgo. No hace mucho, defensores de la costa chiapaneca fueron encarcelados en ejercicio de su labor.

Esto es extensivo a los observadores civiles y de *la otra campaña*, a la prensa tanto alternativa como comercial, y potencialmente a los propios turistas que tanto se ensalza oficialmente y que acuden en gran número al balneario; más ahora, que se aproxima un periodo vacacional. Las amenazas se justifican con el argumento de que esos “extranjeros” serían los causantes del “problema”.

Amenazas similares han circulado en tiempos recientes en Mitzitón, otra comunidad de *la otra campaña* que resiste los proyectos carreteros y turísticos del gobierno y los inversionistas privados. En Bachajón se reproducen dentro de la actual ocupación policiaca de algunos parajes, que se inició el 2 de febrero y recrudeció el 8 del presente, con la intervención de centenares de policías y militares para volver a *tomar* la caseta de acceso turístico en San Sebastián – fugazmente recuperada la víspera por los ejidatarios de *la otra campaña*, que la

construyeron— a las cascadas del vecino ejido Agua Azul (Tumbalá), que también cuenta con su caseta.

En diversos “conflictos” o “problemas” comunitarios en curso, relacionados con bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) o de *la otra campaña*, destaca un patrón, tanto en la hostilidad y agresión de los grupos oficialistas hacia los autónomos como en la clara intervención estatal, sea de carácter represivo o bien de “política social”.

La estrategia contrainsurgente no es nueva, simplemente evoluciona y se hace aún más evidente. En San Sebastián se ha observado que los ex adherentes de *la otra campaña*, que dejaron la resistencia en tiempos recientes, cuentan con privilegios y protección estatal mayor que la dispensada a los grupos de por sí afines al gobierno y los partidos políticos.

Eso explica que, tras su defección, hayan podido ocupar impunemente un rancho en el municipio de Sitalá en enero pasado. Pocas semanas después atacaron con armas de fuego la caseta de *la otra campaña*, la ocuparon unas horas y la entregaron al gobierno estatal.

Con el nuevo y aplastante *operativo* policiaco-militar para despojar de la caseta a los ejidatarios tzeltales el fin de semana, volvió a exponerse la connivencia entre los policías y estos ex adherentes, así como miembros del Partido Verde Ecologista de México, al grado de que sirvieron de guías la noche del viernes para ingresar a Agua Azul y para dirigirse la mañana siguiente a San Sebastián, rodearlo y atacar a pedradas a más de medio millar de indígenas que se encontraban en la zona.

La agresión del sábado fue por tres veredas distintas, pero las familias de *la otra campaña* lograron retirarse a sus poblados, evitando “caer en la provocación”, como manifestaron el domingo pasado.

Es sabido que en ciertos entornos de la resistencia, como el municipio autónomo de Polhó y las Abejas de Acteal (de *la otra campaña*), la presión de los programas gubernamentales es fuerte, casi obsesiva. Allí, como en San Andrés o El Bosque, se cotizan alto las deserciones. *La Jornada* cuenta con testimonios que lo confirman.

Apenas el domingo, la junta de buen gobierno de La Garrucha denunció las amenazas y presiones que reciben sus bases de apoyo en el ejido Cintalapa, quienes podrían ser despojados de sus tierras esta misma semana por no entregar su credencial de elector a los priístas, no solicitar ni aceptar ayuda gubernamental y por enviar a sus hijos a las escuelas autónomas.

Copyright © 1996-2025 DEMOS, Desarrollo de Medios, S.A. de C.V.
Todos los Derechos Reservados.
Derechos de Autor 04-2005-011817321500-203.

Año 41, número 14807, 03 de octubre de 2025, "La Jornada" es una publicación diaria editada por Demos, Desarrollo de Medios, S.A. de C.V. con domicilio en Avenida Cuauhtémoc 1236, Colonia Santa Cruz Atoyac, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03310, Ciudad de México; teléfonos 5591830300 y 5591830400, Fax 5591830356 y 5591830354. Página electrónica del periódico: <https://www.jornada.com.mx> y dirección electrónica: ti@jornada.com.mx. Editor Responsable: María del Carmen Lira Saade. Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo del Título número 04-2005-011817321500-203, ISSN 1563-7476, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de la última actualización de este número, Lizandro Rodríguez Bárcena, Coordinación de Tecnología y Comunicaciones, con domicilio en Avenida Cuauhtémoc 1236, Colonia Santa Cruz Atoyac, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03310, Ciudad de México; teléfono 5591830300 y 5591830400, fecha de la última modificación: 03 de octubre de 2025. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura de Demos, Desarrollo de Medios, S.A. de C.V., ni del editor responsable de la publicación. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de esta publicación por cualquier medio, sin previa autorización expresa de Demos, Desarrollo de Medios, S.A. de C.V.